

VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL ORIGINAL IMPRESO

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

(S-1003/16)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º: Obligatoriedad de los debates. Establécese la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas.

Artículo 2º: Alcance de la obligatoriedad. La obligatoriedad fijada en el Artículo anterior comprende a todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias reguladas por la Ley 26.571.

Artículo 3º: Sanciones. Aquellos candidatos que por imperio de lo dispuesto en la ley se encuentren obligados a participar de los debates y no cumplan con dicha obligación serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual, establecidos en el Capítulo III bis del Título III de la Ley 26.215, incorporado por el Artículo 57 de la Ley 26.571.

Artículo 4º: Temas a debatir. Una Comisión conformada por representantes de los partidos políticos cuyos candidatos participen en los debates acordará la mecánica de realización de los mismos, asegurando que los mismos aborden las temáticas siguientes: políticas económicas y de desarrollo regionales, sociales y educativas, política exterior y defensa, y de servicios públicos e infraestructura

Artículo 5º: Cantidad de Debates. Las temáticas mencionadas en el Artículo anterior se abordarán en 2 (dos) instancias de debate, uno de los cuales deberá llevarse a cabo en el interior del país, en la capital de provincia que determine la Cámara Nacional Electoral.

En caso de que la elección presidencial se decida a través del procedimiento de ballottage, se sumara un debate adicional, con los candidatos que accedan a la elección definitiva.

En todos los casos, las fechas de los debates serán establecidas por la Autoridad de Aplicación, realizándose el último con una anticipación mínima de diez (10) días a la fecha del acto electoral.

Artículo 6º: Emisión de señal televisiva. La emisión televisiva en vivo de los debates la efectuará la Televisión Pública. Dicha señal será de libre acceso para el resto de los canales de aire y las señales de cable y sitios de internet que operen en el país, así como el audio para las emisoras de radio.

El costo de la producción y difusión de los debates será solventado por el presupuesto del Ministerio del Interior y Transporte.

Artículo 7º: Autoridad de Aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la Cámara Nacional Electoral, quedando facultada para reglamentar todos los aspectos complementarios inherentes a la realización de los debates.

Artículo 8º: De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Eduardo A. Aguilar. –Rodolfo J. Urtubey. – Marcelo J. Fuentes. – Miguel A. Pichetto. Juan M. Abal Medina. Omar A. Perotti. – María E. Labado. –Liliana B. Fellner. -

FUNDAMENTOS

Señora Presidente

El Proyecto de Ley que proponemos a este Honorable Senado propicia la instauración de debates públicos obligatorios entre candidatos a Presidente de la Nación.

La iniciativa pretende institucionalizar una práctica política que permita a los ciudadanos conocer y comparar las plataformas de gobierno de los candidatos, ayudándolos en el proceso de decisión del voto.

Es notorio que la política ha sido atravesada en sus prácticas por la lógica de los medios de comunicación. Esto ha tenido algunos efectos negativos, entre los que se cuentan notablemente una fuerte tendencia a la banalización de las campañas electorales, convertidas muchas veces en procesos publicitarios carentes de los contenidos conceptuales en que debe basarse el debate democrático. Más aún cuando lo que está en juego es la Presidencia de la República.

No obstante, con instrumentos y reglas de juego bien diseñados, también puede utilizarse a los medios de comunicación a favor de devolverle al debate político su contenido, su trascendencia y su atractivo. Los debates preelectorales son uno de esos instrumentos.

Buscamos generar una instancia en que los candidatos a presidir la República deban exponer ante las audiencias de todo el país sus propuestas y ejes de gobierno en los temas centrales que hacen al presente y al futuro de la Nación. Y que lo hagan en un marco en el cual estas ideas, y su capacidad para sostenerlas e impulsarlas puedan ser confrontadas y debatidas por quienes, en representación de los partidos, se disputan la primera magistratura. Es decir, un ámbito que no sea de simple discurso individual sino de verdadera exposición y confrontación democrática de ideas.

Estamos convencidos de que nuestra democracia, luego de treinta años de inédita vigencia continua, necesita y puede poner en marcha una institución de estas características.

Lamentablemente, la confrontación política entre compatriotas no siempre ha sido pacífica en la Argentina. Pero el renacer democrático, aún con sus muchas asignaturas pendientes -porque la Democracia es una obra siempre inconclusa- aportó a nuestra vida en común el desterrar para siempre la violencia hacia otros argentinos como práctica política legítima.

Sin embargo, nuestro discurso público aun cede a la tentación, recurrente y mutua, de no reconocer legitimidad a los intereses y la demandas de las que son portadoras fuerzas políticas alternativas.

Este es un déficit notorio de cultura democrática, con efectos nocivos para la construcción tolerante de un país capaz de abarcarnos a todos.

Tenemos que poder “reconocer” al otro, tenemos que poder discutir sus ideas para rebatirlas antes que para descalificarlas. Tenemos que poder admitir que las miradas y los sentires alternativos sobre el país, sobre su historia y sobre los desafíos de su futuro son parte de un todo democrático que plantea conflictos legítimos a ser abordados y resueltos por la política en un marco de pluralismo y tolerancia hacia las opiniones divergentes.

A este proceso tan importante, estamos convencidos, puede ayudar la instauración de los debates preelectorales entre representantes de las principales corrientes políticas del país.

Este proyecto que presentamos al Honorable Senado tiene una característica fundamental: la utilización complementaria de otra reforma electoral e institucional en que recientemente concretó la Argentina, como el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Este proyecto, como característica distintiva, propone utilizar el mecanismo de acceso igualitario a la difusión pública de las

candidaturas a través de los medios, establecido en la Ley 26.571, para solucionar un problema que tradicionalmente han planteado los debates, cual es la no voluntad de participación en los mismos de alguno de los candidatos, en el marco de una cultura política de baja institucionalización.

En tal sentido, se utiliza el acceso a dicha publicidad, gratuita y única a la que tienen derecho los candidatos a través de los medios, para incentivarlos a la participación en los debates preelectorales con independencia del posicionamiento político coyuntural en el que se encuentren. Así, se propone que, quienes teniendo la obligación de participar en los debates no lo hagan, tendrán como penalidad el no acceso a la publicidad gratuita y única, reiteramos, fijada por la Ley.

Esta iniciativa tiene otras tres características relevantes. En principio, un señalamiento indicativo de temas a abordar en el debate, atendiendo a la necesidad de que no se omitan posicionamientos relevantes para el futuro del país.

En segundo lugar, establecemos a la Televisión Pública como lógico canal de emisión, asegurando el acceso a todos los medios de comunicación que quieran participar de la difusión, y ponemos la autoridad de aplicación de esta norma en la Cámara Nacional Electoral, asegurando la plena imparcialidad de la organización.

Finalmente, respetando un principio de federalismo, establecemos que una de las dos instancias de debate, acontezca en el interior del país.

Los debates electorales no son una novedad en América Latina, donde un amplio rango de países lo ha realizado a nivel de candidatos presidenciales, con mayor o menor grado de institucionalización y regulaciones. Son casos que merecen destacarse, porque se trata de países que comparten con la Argentina, una misma historia de alteraciones institucionales, rupturas democráticas y esfuerzos por afianzar una cultura de diálogo y tolerancia política. Estos son los casos de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y Uruguay. Esperamos que la Argentina pueda integrarse a listado a partir de esta iniciativa.

Junto a otros pasos, que debemos diseñar e impulsar, creemos que éste ayudará a transitar el camino de la democracia entendida no solo como voto o como expresión mayoritaria, sino también como práctica, como ejercicio de diálogo, como un estilo de vida basado en el respeto y la tolerancia para procesar las diferencias y los conflictos y arribar a soluciones compartidas.

Lejos estamos de proponer a los debates electorales como una panacea. Nada lo es en la larga vida institucional de un país. Es obvio

que ninguna medida por si sola podrá solucionar los déficits democráticos que aún nos aquejan, pero está claro que postergar iniciativas que pueden contribuir a tal fin -porque por sí solas no son capaces de resolver todos los problemas- es una forma de detener la trabajosa, humilde y lenta construcción que, ladrillo a ladrillo, tenemos que hacer del gran edificio de prácticas institucionales de nuestra vida en común.

Por los fundamentos vertidos, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.

Eduardo A. Aguilar. – Rodolfo J. Urtubey. – Marcelo J. Fuentes. – Miguel A. Pichetto. Juan M. Abal Medina. Omar A. Perotti. – María E. Labado. –